

Artículo 97

de ésta, la facultad de elegir a sus integrantes. Creemos que llegará el día en que sea posible esta realidad y que en el nombramiento de los altos funcionarios de la justicia, la investidura del cargo la haga el propio organismo judicial sin más limitación que seleccionar a las personas que por sus cualidades y niveles intelectuales, de indiscutible valor moral, social y profesional, sean dignos de ostentar el título de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

BIBLIOGRAFÍA: Fix-Zamudio, Héctor, "Supremacía del Ejecutivo en el derecho constitucional mexicano", *Comunicaciones mexicanas al VII Congreso Internacional de Derecho Comparado*, México, UNAM, 1966, pp. 131-181; Fix-Zamudio, Héctor, "Valor actual del principio de la división de poderes y su consagración en las Constituciones de 1857 y 1917", *Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México*, México, año XX, núms. 58-59, enero-agosto de 1967, pp. 29-103; Flores García, Fernando, "Implantación de la carrera judicial en México", *Revista de la Facultad de Derecho de México*, México, t. X, núms. 37-40, enero-diciembre de 1960, pp. 355-373; García Pelayo, Manuel, *Las transformaciones del Estado contemporáneo*, Madrid, 1977, pp. 60-61; Rabasa, Emilio, *La Constitución y la dictadura*, 3ª ed., México, Porrúa, 1956, pp. 169 y ss.

Santiago BARAJAS MONTES DE OCA

ARTÍCULO 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrán los requisitos que exija la ley y durarán 4 años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren reelectos o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar magistrados de circuito y jueces de distrito supernumerarios, que auxilien las labores de los tribunales o juzgados donde hubiere recargo de negocios a fin de obtener que la administración de justicia sea pronta y expedita; y nombrará alguno o algunos de sus miembros, o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designará uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, o alguna de las Cámaras de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal; o algún

hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual.

La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los órganos competentes.

Los tribunales de circuito y juzgados de distrito serán distribuidos entre los ministros de la Suprema Corte, para que éstos los visiten periódicamente, vigilen la conducta de los magistrados y jueces que los desempeñen, reciban las quejas que hubiere contra ellos y ejerzan las demás atribuciones que señala la ley. La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás empleados que le correspondan con estricta observancia de la ley respectiva. En igual forma procederán los magistrados de circuito y jueces de distrito, por lo que se refiere a sus respectivos secretarios y empleados.

La Suprema Corte de Justicia cada año designará uno de sus miembros como Presidente, pudiendo éste ser reelecto.

Cada ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado y, en sus recesos, ante la Comisión Permanente, en la siguiente forma:

Presidente: "¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?"

Ministro: "Si protesto".

Presidente: "Si no lo hiciéreis así, la Nación os lo demande".

Los magistrados de circuito y los jueces de distrito protestarán ante la Suprema Corte o ante la autoridad que determine la ley.

COMENTARIO: En el análisis formulado con relación al artículo 94 se indicó que los tribunales de circuito fueron creación del Constituyente de 1824, al hacerlos formar parte según se dijo, del Poder Judicial federal. Ello fue debido a la influencia ejercida por la organización judicial de los Estados Unidos de América, en cuya Constitución se dividiera la administración de la justicia federal en tres tipos de tribunales. Sin embargo,

cabe hacer una previa advertencia respecto de nuestros actuales tribunales de circuito, porque su estructura y composición guarda escasa relación con los que funcionan desde hace más de cien años, pues aquéllos constreñían su actuación a tres categorías de procedimientos: a) los de tramitación y fallo de apelaciones, cuando este recurso resultaba procedente; b) los relacionados con la calificación de impedimentos, excusas o recusaciones de los jueces de distrito; y c) los correspondientes a cualquier controversia de jurisdicción que se suscitara entre dos o más jueces de distrito; funciones hoy destinadas, entre otras varias, a los magistrados unitarios de circuito, en tanto que los tribunales colegiados de circuito tienen atribuciones similares a las de la Suprema Corte de Justicia, con distinta jurisdicción potencial. En los años posteriores a 1824, una ley reglamentaria fijó las *cualidades* de los magistrados que integraban aquellos tribunales; su número; radicación; responsabilidades y formas de elección.

La aparición de los tribunales colegiados de circuito, producto de una reforma hecha el año de 1950 y regulada con posterioridad en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aparte de ser reciente ha obedecido a diferentes problemas que serán examinados en otros artículos. De ahí que cualquier antecedente relacionado con los tribunales de circuito se contrae a los *unitarios*, cuyos orígenes encontramos, como varias de las instituciones y métodos constitucionales que se examinarán también en otros artículos, en las leyes de la Colonia, referidas entonces con exclusividad a las cuestiones civiles y criminales de mayor importancia social; leyes en las que con extraordinaria sabiduría se dispuso que: "ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer, en ningún caso, funciones judiciales, ni avocarse a la resolución de causas pendientes, o mandar abrir los juicios fenecidos"; y las cuales establecieron que los tribunales tampoco podían ejercer otras funciones distintas a las de juzgar y hacer que se estudiara lo juzgado; no pudiendo ser depuestos los magistrados o jueces sino por causas legalmente probadas y sentenciadas; ni suspendidos unos u otros cuando no existiera acusación en su contra, intentada en forma legal.

Para don José Ma. Morelos y el grupo político que lo acompañó y contribuyó a la redacción de la Constitución de Apatzingán, un tribunal superior de justicia integrado con cinco magistrados más dos fiscales letrados (uno para lo civil y otro para lo criminal), cuyo encargo duraría cuatro años, debía concentrar su actuación en el examen de "las causas de homicidio, de resistencia o infidencia, de deposición de algún empleado, de las controversias que surgieran contra resoluciones de los juzgados eclesiásticos; así como de los asuntos civiles de su competencia, en los cuales se versare un interés superior a los veinticinco mil pesos".

Sus sentencias serían definitivas, de carácter confirmatorio o revocatorio de las que hubieren pronunciado los tribunales comunes. Y en cuanto a la elección de los *individuos* integrantes del tribunal, ésta quedaría hacerla al Congreso, mediante selección de una terna de candidatos, propuesta para cada vacante (artículos 151 a 157; 181 a 186 y 200 del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana).

En la Constitución de 1824 se dejó establecido que el Poder Judicial de la Federación residiría en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. Sus miembros serían electos, respecto de la primera, por el Congreso de la Unión mediante terna que se formará para tal efecto, previa discusión de las *cualidades* de los candidatos que fueran propuestos (artículos 123 a 127). Este criterio prevaleció en la Constitución de 1857, en donde asimismo quedó depositado el Poder Judicial federal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito, dejándose a una ley reglamentaria la organización de dichos tribunales y juzgados, al igual que el nombramiento de magistrados y jueces.

El artículo 97 tal y como quedó aprobado por el Constituyente de 1917 confirmó que tanto los magistrados como los jueces de distrito, serían nombrados por la Suprema Corte, de acuerdo con los requisitos exigidos por la ley; durarían en su encargo cuatro años y no podían ser removidos sino previo juicio de responsabilidad en su contra o por incapacidad para su desempeño. La primera reforma a este precepto constitucional tuvo lugar el año de 1928 (publicada en *Diario Oficial* de fecha 20 de agosto), pero sólo modificó la redacción de los párrafos tercero y cuarto, para suprimir del primero el concepto relativo al conocimiento, por parte del más alto tribunal de la República, de la violación de algún delito castigado por la ley federal; respecto del segundo, para cambiar la ubicación de la disposición concerniente al nombramiento de presidente de la Suprema Corte.

El año de 1940 se introdujo el actual párrafo quinto (con anterioridad cuarto) para distribuir entre los ministros de la Suprema Corte, la vigilancia de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, al igual que las funciones de los encargados de ellos. Se les fijó también como atribución atender cualquier queja sobre la conducta de dichos funcionarios, quedando vigente la facultad del tribunal para nombrar y remover a su secretario y empleados. La redacción de la parte final fue modificada para permitir a magistrados y jueces nombrar y remover a sus respectivos secretarios y empleados. Tal modificación no resultó substancial, sino únicamente de estilo gramatical.

Es importante, en cambio, la adición del actual

párrafo cuarto, relacionado con el voto público. La atribución anterior de la Suprema Corte sobre el particular, siempre se ejerció con bastante precaución en los pocos casos en que fue solicitada su intervención durante las contiendas electorales del país. Pero el año de 1977, al tener lugar la reforma electoral, los partidos políticos de oposición, que fueron quienes con mayor frecuencia solicitaron a la Suprema Corte la indagación sobre violaciones al voto público, insistieron en modificar tal intervención, a efecto de que pudiera investigar un proceso electoral específico en el que pudieran ser alegadas violaciones de tal naturaleza.

La iniciativa provocó amplio y enconado debate, por estimarse inconveniente cualquiera intervención del Poder Judicial en las cuestiones de política electoral, ya que una fracción de la Cámara de Diputados estimó que tal facultad compete exclusivamente al Poder Legislativo de la Federación y nada tiene que revisar la Suprema Corte de Justicia en materia de voto público; otro grupo consideró que debían ser los partidos políticos quienes en definitiva decidieran sobre la estructura y rumbo que debe seguir nuestro país en su desarrollo político y social, sin restarle autoridad a la Suprema Corte, lo cual ocurriría al conferir a otro poder cualquier decisión sobre calificación del voto público y no acatarla después; y una tercera posición de un sector más, se acogió al proyecto de don Venustiano Carranza sobre el artículo 97, estimando que la Suprema Corte, debido a su desinterés en los procesos políticos, resultaría el órgano idóneo para emitir una opinión fundada, cuando alegaren violaciones al voto público. Fue considerada la intervención de la Suprema Corte en este capítulo, no para mezclarla —según se dijo— en las consecuencias políticas de los hechos cuya investigación fuera solicitada, por carecer de facultades para ello; tampoco para abrir un juicio político que no procede; sino para emitir un juicio sereno e imparcial sobre determinada situación, a fin de *ajustar* cualquier protesta electoral que fuese presentada, a la *más estricta verdad*.

Pero como lo expresara el doctor Mario de la Cueva en un artículo que tituló "Grandeza y tragedia de la Corte": "el procedimiento ideado en la iniciativa a fin de que intervenga la Corte en una especie de consultoría o de primera instancia, rompe el sueño milenario del gobierno de las leyes, al igual que la idea del estado de derecho degrada al Poder Judicial, tanto al subordinar sus decisiones al criterio de los hombres de la política como al desconocer la concepción actual de la doctrina de la separación de poderes, tal y como la concibió su padre fundador, el barón de Montesquieu".

Expuestos los antecedentes del artículo 97 revisemos ahora sus capítulos, que procuraremos resumir en lo esencial dado lo extenso de su contenido. Se empieza por señalar la forma en que

tanto magistrados como jueces pueden ser nombrados directamente por la Suprema Corte, reglamentada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual comprende: a) *los requisitos* que deban llenar los candidatos a cualquiera de los puestos; b) *la duración del cargo*, que en principio será de cuatro años, durante los cuales tendrán libre y cabal ejercicio de la función judicial, salvo reclamaciones justificadas que se presentaran en su contra; c) *la posibilidad de su reelección*, con carácter indefinido hasta cumplir los setenta años, edad límite para cesar en cualquier función judicial, situación que prácticamente los hace vitalicios; d) en el caso de los jueces de distrito, *su promoción a cargos superiores* de magistrados unitarios o magistrados colegiados; e) *la sujeción a un juicio de responsabilidades*, precisado en el título cuarto de la propia Constitución, en cuyo artículo 108 (primera parte) quedan incluidos dichos funcionarios, como se apreciará al ser examinado este otro precepto; f) *los métodos para su traslado*, facultad reservada al alto tribunal de la República de cambiar de lugar de adscripción de unos y otros, y de fijarles residencia, en poblaciones donde se estime sean indispensables sus servicios, o en poblaciones donde las exigencias públicas los hagan necesarios, según el volumen de los negocios que deban ser atendidos en determinada región del país.

No resulta fácil, aun cuando lo parezca a la simple vista, delimitar los conceptos de selección y nombramiento de magistrados y jueces, tanto por la circunstancia de no cursarse entre nosotros la carrera judicial, como por existir diversos criterios en la selección del personal del Poder Judicial federal. Estos criterios podemos encuadrarlos, en un primer plano, en los requisitos señalados, que son los siguientes: calidad de mexicano por nacimiento; pleno ejercicio de derechos; poseer título de licenciado en derecho; 35 años de edad para ser magistrado, 30 para ser juez; haber prestado servicios en la judicatura, por regla general la federal, aunque se ha dado el caso de jueces o magistrados que han prestado servicios en tribunales locales. Y en un segundo plano, en un sistema tradicional apoyado en elementos objetivos, pues se selecciona para el desempeño de un cargo a quien se haya distinguido en el campo de la administración de justicia, a quien haya mostrado elevados atributos de honorabilidad y conducta personal, y quien haya mantenido al corriente y dentro de los términos legales, el despacho de los asuntos a su cuidado. Este sistema ha dado excelentes resultados, como puede comprobarse con el alto nivel de nuestros tribunales federales, lo cual ha permitido suplir con eficacia la inexistencia del funcionario judicial de carrera.

En segundo término, prevé el artículo 97 el nombramiento de magistrados o jueces supernumerarios, siempre que se requiera auxiliar en sus

labores a aquellos tribunales o juzgados donde exista un recargo apreciable de asuntos. Efectivamente, conforme con esta facultad, al presentarse el aumento de la actividad judicial de los primeros tribunales colegiados de circuito, resultó indispensable en algunos casos, la creación de tribunales supernumerarios; pero tal necesidad ha desaparecido con las reformas introducidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, pues cada día es mayor el número de estos tribunales y juzgados, los cuales funcionan con carácter definitivo, al grado de poder decir que la mayor parte de los estados de la República cuenta ya con un tribunal cuando menos, y se han fundado juzgados en todas las poblaciones de importancia demográfica, tanto para aliviar el recargo de negocios en algunos lugares como evitar a los habitantes el traslado a poblaciones distantes de su residencia habitual. El permanente empeño de nuestra Suprema Corte de Justicia, de *administrar una justicia pronta y expedita*, ha sido la clave de este fortalecimiento judicial que hoy se ve colmado con la existencia de 27 tribunales colegiados de circuito, 16 tribunales unitarios de circuito, 28 juzgados de distrito en el Distrito Federal y 77 dispersos en el ámbito geográfico del país; con la posibilidad de aumentar unos u otros, según vayan resultando necesarios.

Respecto de los comisionados especiales, si su nombramiento pudo resultar eficaz en alguna época, por requerirlo así la investigación de hechos que pudieran constituir violación de garantías individuales, llevadas a cabo por funcionarios judiciales o por haberlo solicitado, como se indica en el precepto, el Ejecutivo federal, alguna de las cámaras o el gobernador de algún estado; todo ello ha quedado prácticamente incorporado en el informe periódico que proporcionan los señores ministros visitantes, respecto de su presencia oficial en tribunales y juzgados, y mediante inspecciones de carácter administrativo y judicial. En la actualidad, parte de las obligaciones de su ministerio, lo constituyen estas visitas y la indagación pormenorizada de cualquier irregularidad o queja que haya sido denunciada o expuesta, pues los afectados podrán exponer en forma verbal unas u otras. Además, cuando algún asunto debe ser investigado en particular, el pleno de la Suprema Corte comisiona al ministro visitador correspondiente, para proceder a la inmediata aclaración del mismo y para informar en su oportunidad de las violaciones de orden jurídico o administrativo que haya encontrado. Y para mayor facilidad del público, cuando el ministro practique una visita oficial, deberá informar por los conductos que considere pertinentes (periódicos, estrados en los locales u otros) las fechas y horas en que practicará una visita o realizará cualquier investigación, para que quien lo desee, acuda a expresar sus quejas, siempre que estén fundadas y justificadas.

Un párrafo controvertido es el correspondiente a la facultad de la Suprema Corte para practicar, de oficio, la averiguación de hechos que constituyan violación del voto. Los autores se han dividido y encontramos conceptos de contenido diverso en cada uno de ellos. Expondremos los que, a nuestro juicio, resultan de mayor interés.

Pensaba don Emilio Rabasa, eminente constitucionalista, que la Suprema Corte no era solamente un tribunal, sino un verdadero poder supremo, puesto que así lo había considerado desde sus albores de nuestro constitucionalismo el Legislador federal de 1824, quien en el capítulo correspondiente revelara su espíritu y propósitos de reservar para dicho cuerpo jurídico el nombre de *Corte Suprema* y para sus miembros el de *ministros*. La tesis de Rabasa, en materia de voto público, expresa en síntesis, que siendo la Suprema Corte un poder constitucional, debía ser importante función investigadora suya, todas las cuestiones relacionadas con violaciones al voto público, y debía proceder contra ellas el juicio de amparo y no sólo una simple revisión de hechos, porque tratándose de la libre y muy respetable emisión del voto público, debía considerarse esta función como derivada del control constitucional que compete a nuestro más alto tribunal en el país.

Para el maestro Carrillo Flores, la función de la Suprema Corte no será verdaderamente trascendental en la esfera del control de la constitucionalidad, sino en aquello que ha animado al constituyente para instituir el amparo, síntesis de la defensa de los derechos fundamentales del hombre políticamente desvalido. La investigación sobre violaciones al voto público no debe considerarse —a su criterio— actitud sospechosa e intrascendente, ya que “lo más valioso del derecho no es fabricar normas de justicia o de lógica irreprochable, sino hacerlas vivir en toda su magnitud y eficacia”. Para este jurista lo que importa es pensar que la tarea investigadora asignada a la Suprema Corte, llegue a ser un instrumento que vigorice la vigencia de las normas que garantizan el respeto a las libertades y derechos fundamentales del individuo.

El maestro don Felipe Tena Ramírez cree por su parte, que la investigación en materia de voto público que pudiera llevar a cabo la Suprema Corte en cumplimiento de una obligación inserta en el texto constitucional, puede ser de interés, pero sólo por cuanto se traduce en la única forma de protesta que la Constitución le concede al ciudadano *frente a los fuertes que abusan de la fuerza*. Si ello trae ciertas implicaciones posteriores, de carácter eminentemente político, no se debe a la circunstancia de pretender que la Corte invada jurisdicciones ajenas, sino por lo contrario, debe estimarse que su acción se dirige a evitar la ejecución de actos violatorios de garantías indivi-

duales muy respetables, mismas cuya custodia le corresponden.

Y para el doctor Fix-Zamudio, la introducción del párrafo en cuestión, no representa ninguna novedad constitucional, pues desde el año 1946 se dieron los primeros casos en que la Suprema Corte determinara la investigación de violaciones al voto público. Entonces llegó a la conclusión, no sin antes realizar un exhaustivo examen que hizo de la cuestión una comisión de ministros designada por el pleno, que solamente debía darse a conocer al presidente de la República la existencia de las violaciones denunciadas, negándose en esa y posteriores ocasiones, a pronunciar cualquier resolución al respecto, con apoyo en dos argumentos, que todavía se sustentan en nuestro más alto tribunal: uno, que los hechos denunciados no afectan ni pueden afectar las condiciones generales de la nación, máxime cuando por regla general existe indeterminación en los planteamientos formulados; otro, que declarar la nulidad de unas elecciones populares está fuera de las atribuciones constitucionales que le corresponden, por desembocar cualquier resultado o solución que se proponga, en una opinión puramente declarativa; con mayor razón si se toma en cuenta lo dispuesto por el artículo 60 de la Constitución federal, en el sentido de que sea cada Cámara quien califique la elección de sus respectivos miembros. Ningún objeto, por lo mismo, a juicio de este autor, tiene el que la Corte investigue la violación del voto público, si con posterioridad a cualquier calificación que se haga, no prevalece su criterio; ello sólo alteraría el ánimo de los votantes ante el menosprecio que las comisiones calificadoras otorgaran a sus fallos.

No podemos extendernos en mayores consideraciones, pero baste lo expresado y lo ya transcrito del doctor De la Cueva, para que el lector se oriente en lo que a su juicio estime proceda. Desde luego, para quien milite en forma activa en un partido político, la intervención de la Suprema Corte debería ser decisiva y definitiva; para quien se ajuste al orden constitucional estricto, carece de toda relevancia esta atribución y por tanto nuestro alto tribunal no debe intervenir en forma alguna en el juego político, pues repitiendo el planteamiento de los ilustres maestros, perdería fuerza su actuación como poder constitucional de equilibrio.

Finalmente y casi en resumen, expresemos respecto de la protesta que deben rendir ministros, magistrados y jueces, que su práctica nació por sugerencia del Constituyente de 1857, quien estimaba de muy importante carácter cívico el compromiso moral que ante la nación hicieran, todos los funcionarios y empleados que prestaran servicios públicos. En el artículo 94 de la Constitución promulgada por dicho Constituyente se indicó que los individuos que integraran la Suprema Corte,

debían prestar el juramento siguiente: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado de la Suprema Corte de Justicia que os ha conferido el pueblo, conforme a la Constitución y mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? El interpelado debía contestar: “Sí; protesto.”

El cambio actual, como puede verse de la comparación gramatical de ambas disposiciones, sujeta la protesta a la *guarda de la Constitución* y de las leyes que de ella emanen, habiéndose suprimido toda mención del pueblo. La razón ha sido la reiterada exposición que se ha hecho, en el sentido de que en la anterior Constitución el nombramiento de un ministro, se hacía mediante elección, interviniendo en la misma el Senado. Tal situación desapareció con la reforma de 1928 al dejarse al presidente de la República la facultad de hacer el nombramiento de un ministro. El Senado sólo toma actualmente la protesta constitucional del funcionario judicial, ministro o magistrado federal, y en los periodos de receso, la Comisión Permanente.

BIBLIOGRAFÍA: Carpizo, Jorge, *La Constitución mexicana de 1917*, 4ª ed., México, UNAM, 1980, p. 206; Carrillo Flores, Antonio, *La justicia federal y la administración pública*, 2ª ed., México, Porrúa, 1973, pp. 141-189; Fix-Zamudio, Héctor, *El juicio de amparo*, México, Porrúa, 1964, pp. 47 y ss.; Fix-Zamudio, Héctor, “El sistema presidencial y la división de poderes en el ordenamiento mexicano”, *Libro-homenaje a Manuel García Pelayo*, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1980, t. I, pp. 269-273; Rabasa, Emilio, *La Constitución y la dictadura*, 3ª ed., México, Porrúa, 1956, pp. 186-204; Tena Ramírez, Felipe, *Derecho constitucional mexicano*, 16ª ed., México, Porrúa, 1978, pp. 503-513.

Santiago BARAJAS MONTES DE OCA

ARTÍCULO 98. Los ministros numerarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán suplidos en sus faltas temporales por los supernumerarios.

Si la falta excediere de un mes, el Presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro provisional a la aprobación del Senado o en su receso a la de la Comisión Permanente, observándose, en su caso, lo dispuesto en la parte final del artículo 96 de esta Constitución.

Si faltare un ministro por defunción o por cualquiera causa de separación definitiva, el Presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado. Si el Senado no estu-